



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 76/2014

FORMA A-53

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA NÚMERO: 76/2014.**

SERVIDORA PÚBLICA INVOLUCRADA:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de octubre de dos mil quince.

VISTOS; para emitir resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 76/2014; y,

RESULTANDO:

1. **PRIMERO. Denuncia.** Mediante oficio CSCJN/DGRARP/DRP/3941/2014, de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial informó al Contralor, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quien ocupó hasta el treinta de abril de dos mil catorce el cargo de Técnica Operativa, rango F, puesto de base, con adscripción a la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaba obligada a presentar su declaración de modificación

patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil trece, así como su declaración de conclusión del encargo a partir del día siguiente a aquel en que causó baja por renuncia del treinta de abril de dos mil catorce. Sin embargo, hasta ese momento no las había formulado (fojas 1 y 2 del expediente principal).

2. **SEGUNDO. Procedimiento.** Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil catorce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio de mérito y, sobre la base de la suficiencia de los elementos aportados, ordenó tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa número **76/2014** en contra de la servidora pública involucrada, al estimar presuntamente actualizada la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 8, fracción XV, 36, fracción XII, y 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; vinculado con los artículos 50, fracción XXV, y 51, fracción II, del Acuerdo número 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a los Procedimientos de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

215
FORMA A-53
P.R.A. 76/2014

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de este Alto Tribunal y del seguimiento de la situación patrimonial de éstos y de los servidores públicos a los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en esencia, al considerar que la servidora pública citada había omitido presentar su declaración patrimonial de conclusión de su encargo en el término que tenía para hacerlo (fojas de la 101 a la 111 vuelta del expediente principal).

3. Cabe mencionar que, pese a que la denuncia también se formuló respecto de la omisión de presentar la declaración de modificación patrimonial correspondiente al ejercicio dos mil trece, se determinó que el procedimiento únicamente se instruiría respecto de la posible omisión de formular la declaración patrimonial de conclusión del encargo, pues se estimó que no existía obligación de la servidora pública involucrada de presentar la declaración de modificación patrimonial porque causó baja el día treinta de abril de dos mil catorce, sino únicamente la de conclusión (foja 104 y 109 vuelta del expediente principal).

4. En ese sentido, se le concedió un plazo de cinco días hábiles para que rindiera el informe previsto en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 38 del Acuerdo Plenario 9/2005 antes mencionado, y ofreciera las pruebas que estimara dables.
5. Por constancia de veintiuno de enero de dos mil quince, el licenciado Juan Claudio Delgado Ortiz Mena manifestó que con motivo del acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, emitido por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fungiría como titular de la Contraloría del Alto Tribunal a partir de esa fecha (foja 119 del expediente principal).
6. Por auto de fecha nueve de marzo de dos mil quince, el Contralor de la Suprema Corte ordenó se girara atento oficio al Juez de Distrito en turno en el Estado de Coahuila para que se llevara a cabo, por su conducto, la notificación personal a la probable responsable del proveído de quince de diciembre de dos mil catorce, por el cual se le instauró el presente procedimiento de responsabilidad administrativa (fojas 187 y 188 del expediente principal). El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, quien conoció de dicha



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

246
FORMA A-53
P.R.A. 76/2014

petición, devolvió a la Contraloría el exhorto debidamente diligenciado, a través del oficio 9-2530, remitiendo las constancias correspondientes (foja 200 de los autos). Ese oficio y sus anexos se tuvieron por recibidos en la Contraloría por auto de fecha veintidós de abril de dos mil quince (foja 240 del expediente principal). En el exhorto que se adjuntó al comunicado referido se puede apreciar que con fecha trece de abril de dos mil quince se practicó la notificación personal ordenada (foja 234 de autos).

7. **TERCERO. Informe.** Mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil quince, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por rendido el informe presentado por probable responsable en el que expuso diversas manifestaciones a su favor. Además, se le tuvo por ofrecida la prueba documental consistente en el original de la declaración de conclusión del cargo que acompañó a su informe, la cual se tuvo por desahogada dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, se ordenó remitir esa declaración a la Dirección de Registro Patrimonial para que se agregara al expediente de la servidora pública y para que, en su momento, se expidiera copia certificada del acuse de recibo correspondiente con el fin de agregarlo a los autos del presente

procedimiento (fojas 240 y 241 vuelta del expediente principal).

8. **CUARTO. Cierre de instrucción.** Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005 (foja 263 del expediente principal).

9. **QUINTO. Dictamen de la Contraloría.** El veintiocho de septiembre de dos mil quince, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO. Se estima que
es responsable de la
falta administrativa por la que se inició
este procedimiento, conforme a lo
señalado en los considerandos tercero y
cuarto del presente dictamen.

SEGUNDO. Se propone sancionar a
con
amonestación privada, de acuerdo con
lo señalado en el último considerando
de este dictamen”.

10. Las consideraciones en que se apoyó dicha propuesta de resolución se sustentan, esencialmente, sobre la base de que la probable responsable, al concluir su cargo de Técnica



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 76/2014

FORMA A-53



Operativa, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no había satisfecho su obligación de presentar su declaración patrimonial de conclusión de encargo en el término que tenía para ello, pues la exhibió de forma extemporánea.

11. Desde esa consideración, una vez revisados los elementos respectivos a la sanción, el dictamen propuso imponer una **amonestación privada** (foja 271 del expediente principal).

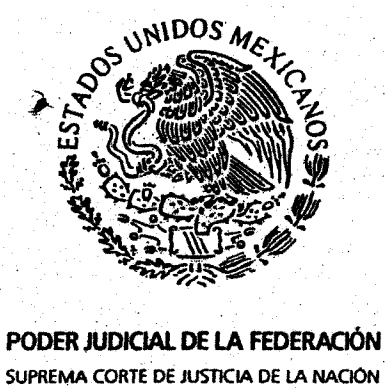
12. **SEXTO. Trámite del dictamen.** El dictamen aludido, inserto al expediente del procedimiento administrativo 76/2014, se remitió al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de este Alto Tribunal, para que conociera y resolviera del caso en términos del artículo 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (fojas 271 del expediente principal).

CONSIDERANDO

13. **PRIMERO. Competencia.** El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23, 25, segundo párrafo, y 40 del Acuerdo Plenario 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco, en tanto se trata de una servidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

14. **SEGUNDO. Análisis de la conducta atribuida a la servidora pública.** Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte que la conducta que se le atribuye a la probable responsable cuando concluyó su encargo como Técnica Operativa, rango F, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción XV, en relación con el 36, fracción XII, y 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como en relación a los numerales 50, fracción



XXV, y 51, fracción II, del Acuerdo Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal.

15. Concretamente se le atribuye haber omitido presentar la declaración patrimonial de conclusión relativa a su encargo en el término que tenía para hacerlo, pues lo hizo en forma extemporánea.

16. Ahora, para definir la configuración o no de la referida causa de responsabilidad es necesario traer a cuenta el contenido del marco normativo relevante que se desprende de los siguientes artículos:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

(...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;
(...)”

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

“Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(...)

XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;
(...)”

“Artículo 36. Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:

(...)

XII. Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, u quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos;
(...)”

“Artículo 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

(...)

II. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 76/2014

FORMA A-5:

(...)"

Acuerdo General Plenario 9/2005.

"Artículo 50. Tienen obligación de presentar ante la Suprema Corte declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los siguientes servidores públicos (...)

XXV. Con independencia de la denominación del puesto, **todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, presupuestales, valores y fondos de la Federación;** realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, así como quienes intervengan en la adjudicación de pedidos y contratos, (...)"

"Artículo 51. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: (...)

II. Declaración de conclusión de encargo, dentro de los sesenta días naturales al en que se de ese supuesto. (...)"

17. Ahora bien, en lo que aquí importa, de lo dispuesto en los artículos transcritos se desprende que una

de las obligaciones a cargo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, específicamente de aquellos que realizan actividades vinculadas con el manejo o aplicación de recursos económicos, presupuestales, valores y fondos de la Federación, independientemente de la denominación de su cargo, consiste en presentar la declaración patrimonial de conclusión del encargo, que debe acontecer dentro de los sesenta días naturales siguientes a esa conclusión, en caso contrario se actualiza una causa de responsabilidad.

18. Trasladando esa premisa al caso se obtiene, sin lugar a dudas, que la servidora pública involucrada no sujetó su actuación a la exigencia dispuesta en dicha obligación, pues de las constancias que obran en autos, a las que se da valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II¹, 129², 197³ y 202⁴, del

¹ **ARTÍCULO 93.-** La ley reconoce como medios de prueba:
(...)

II.- Los documentos públicos;

² **ARTÍCULO 129.-** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

³ **ARTÍCULO 197.-** El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.



Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte en lo que importa, que:

- La probable responsable recibió nombramiento definitivo de Técnica Operativa, rango F, puesto de base, con efectos a partir del primero de febrero de dos mil diez, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 46 del expediente principal).
- Del oficio CSCJN/DGRARP/DRP/3903/2014 se advierte que la probable responsable omitió presentar su declaración patrimonial de conclusión del encargo dentro de los sesenta días naturales posteriores a dicha conclusión. Ese plazo transcurrió del uno de

⁴ **ARTÍCULO 202.-** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.

mayo al veintinueve de junio de dos mil catorce (fojas 1 y 2 del expediente principal).

- De la copia certificada del Aviso de Baja de la servidora pública involucrada, se acredita que la probable responsable causó baja del cargo de Técnica Operativa que ocupaba en la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, de la Suprema Corte, por renuncia a partir del treinta de abril de dos mil catorce (foja 9 del expediente principal).
- De la copia certificada del acuse de recibo por la Dirección General de Registro Patrimonial de la recepción de la declaración de conclusión del encargo de la servidora pública involucrada, se acredita que fue presentada el dieciséis de abril de dos mil quince, esto es, una vez que ya se había iniciado el presente procedimiento, por lo que fue exhibida de manera extemporánea, pues tenía la obligación de formularla a más tardar el día veintinueve de junio de dos mil catorce (foja 248 del expediente principal).
- De la copia certificada de la Cédula de Funciones relativa al puesto de Técnico Operativo que ocupaba la probable responsable, se desprenden las tareas que



tenía encomendadas en el ejercicio de su cargo, entre las cuales se encontraban: ser la responsable del equipo necesario para el desarrollo de los eventos que se llevaban a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica a la cual se encontraba adscrita, realizar su planeación, así como participar en la logística de dichos eventos (foja 28 del expediente principal).

19. Pues bien, de los datos antes revelados es fácil desprender que, por las funciones que tenía encomendadas la probable responsable durante el tiempo que fue servidora pública de este Alto Tribunal, estaba obligada a presentar su declaración patrimonial de conclusión del encargo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que causó baja.
20. Lo anterior porque las tareas que debía realizar (entre las que se encontraban, como ya se dijo, las de ser la responsable del equipo necesario para el desarrollo de los eventos, realizar su planeación, así como participar en su logística) se ubican en los supuestos que señala el artículo 50, fracción XXV, del Acuerdo General Plenario 9/2005, ya que estas actividades, resulta evidente, se encuentran vinculadas necesariamente con el manejo de

recursos económicos y valores, pues no podría entenderse la responsabilidad respecto del equipo necesario para el evento, la planeación de las actividades y la actividad logística de acontecimientos programados, sin la necesidad de que la servidora pública fuese responsable de los bienes a disposición de la Casa de la Cultura Jurídica correspondiente para poderlos llevar a cabo y gestionar su desarrollo. Por ello, se demuestra la existencia de la obligación a cargo del probable responsable con motivo de las funciones que tenía encomendadas.

21. Sin embargo, como ya se ha adelantado, dicha persona no sujetó su actuación a tal obligación, pues la referida declaración se recibió el día dieciséis de abril de dos mil quince, como consta en la copia certificada del acuse de recibo que la Dirección Patrimonial expidió al respecto. Lo anterior demuestra que la declaración fue presentada en forma extemporánea.
22. En ese sentido, lo manifestado por la probable responsable en su informe de fecha quince de abril de dos mil quince, además, confirma esa conclusión (foja 239 del expediente principal), pues en él reconoce expresamente haber omitido presentar su declaración en el término que tenía



para ello, por lo que, incluso, adjuntó al informe que rendía su declaración, la cual se le tuvo por presentada hasta el dieciséis de abril de dos mil quince.

23. Tales manifestaciones convalidan que la probable responsable presentó su declaración patrimonial de conclusión fuera del plazo previsto en la fracción II, del artículo 51, del Acuerdo General Plenario 9/2005.
24. Por lo demás, los restantes razonamientos cabrían valorarse, en todo caso, frente a la individualización de la sanción que se realizará, pero no por cuanto al acreditamiento de la responsabilidad.
25. En consecuencia, ante el incumplimiento hasta aquí revelado, se estima acreditada la causa de responsabilidad imputada, prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8, fracción XV, 36, fracción XII, y 37 fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como 50, fracción XXV, y 51, fracción II, del Acuerdo Plenario 9/2005 de veintiocho de marzo de dos mil cinco del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, relativo a los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

26. **TERCERO. Sanción.** Al haber quedado demostrada la infracción administrativa atribuida a la servidora pública responsable, se procede a individualizar la sanción que le corresponde, conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 45 y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

a) Gravedad de la infracción. La conducta atribuida a la infractora no está expresamente catalogada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso concreto tampoco se le considera así.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

b) **Circunstancias socioeconómicas.** No es necesario analizarlas, puesto que en este caso no se impondrá sanción pecuniaria.

c) **Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio.** De las constancias del expediente personal de la infractora, del escrito de veintidós de junio de dos mil quince, signado por la Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa y de la copia certificada del nombramiento de Técnica Operativa, rango F, puesto de base que se expidieron en su favor, con adscripción a la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila; se acredita que al treinta de abril de dos mil catorce (fecha en que causó baja por renuncia), la infractora contaba con una antigüedad de cinco años, cuatro meses. (foja 259 del expediente principal).

d) **Condiciones exteriores y los medios de ejecución.** En este aspecto se tiene que el incumplimiento derivó en la presentación extemporánea de la declaración de conclusión del encargo, lo cual impacta de manera negativa en la rendición de cuentas en el cargo público desempeñado.

e) Reincidencia. De las copias certificadas que obran en el expediente personal de la servidora pública involucrada y del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que haya sido sancionada con motivo de alguna falta administrativa, según constancia de veintitrés de septiembre de dos mil quince, que emitió la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 262 del expediente principal).

f) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. En la especie no existe prueba de que la infractora hubiera obtenido algún beneficio o lucro indebido, ni ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió.

27. En mérito de las consideraciones que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII, 133, fracción II, 135, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 45, fracción II, y artículo 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, esta Presidencia estima que se debe imponer a la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



FORMA A-53

P.R.A. 76/2014

infractora la sanción consistente en **apercibimiento privado**, que se ejecutará en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción I, del Acuerdo General Plenario 9/2005. Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal de la servidora pública.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

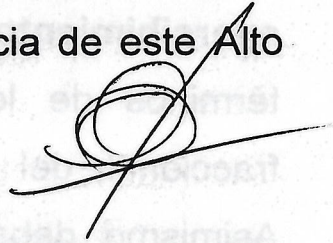
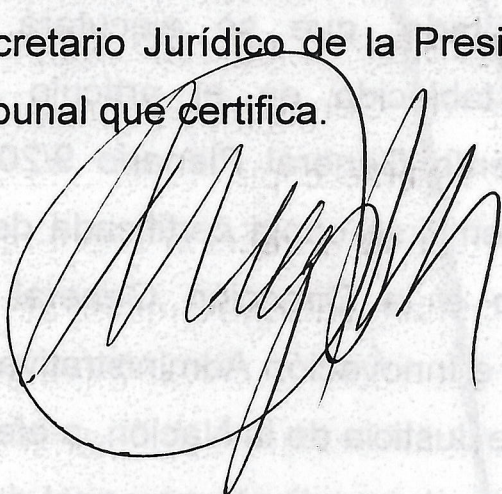
PRIMERO. Se acredita la causa de responsabilidad materia del procedimiento, atribuida a

SEGUNDO. Se impone a la persona mencionada, la sanción consistente en un **apercibimiento privado**.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, quien actúa con el
Licenciado Alejandro Manuel González García,
Secretario Jurídico de la Presidencia de este Alto
Tribunal que certifica.



Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad
administrativa 76/2014.